La FIDH llama al gobierno de Canadá a retirar los proyectos de ley C-2 y C-12, que suponen un retroceso sin precedentes en los derechos de las personas migrantes

El proyecto de ley C-2, *Ley relativa a determinadas medidas relacionadas con la seguridad de la frontera entre Canadá y Estados Unidos y otras medidas conexas relacionadas con la seguridad*, o *Strong Border Act*, y el proyecto de ley C-12, Ley destinada a reforzar el sistema de inmigración y la frontera de Canadá, se presentaron en junio de 2025 y octubre de 2025, respectivamente. Estas propuestas legislativas representan un retroceso sin precedentes en los derechos de las personas con estatus migratorio precario que se encuentran en Canadá. Anuncian un importante retroceso en el derecho de asilo y amenazan con empujar a un gran número de migrantes a la clandestinidad.

Los proyectos de ley harían inadmisibles ciertos tipos de solicitudes de asilo, privando así a muchas personas de un procedimiento justo y equitativo para determinar su condición de refugiado. Una persona ya no podría solicitar asilo si hubiera transcurrido más de un año desde su primera entrada en Canadá. El acceso al asilo también quedaría completamente bloqueado para cualquier persona que haya entrado en Canadá de forma irregular desde Estados Unidos. Los proyectos de ley C-2 y C-12 amenazan con privar a miles de personas de la evaluación de su solicitud de asilo por parte de la Comisión de Inmigración y Refugiados de Canada, un tribunal independiente. Muchas de ellas solo tendrán derecho a la Evaluación de Riesgos antes de la Deportación (ERAR), un procedimiento extremadamente restrictivo, con una tasa de aprobación muy baja, que se basa en la decisión de un funcionario apoyándose únicamente en un expediente en papel, en lugar de una audiencia frente a un decisor independiente. En resumen, estos proyectos de ley aumentarán considerablemente el riesgo de devolución de muchas personas.

RECORDANDO que la FIDH es una federación que agrupa a 188 organizaciones miembros reunidas para la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;

RECORDANDO que Canadá está vinculado a varios instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y debe guiar sus acciones teniendo en cuenta el derecho de asilo y los principios relativos a la dignidad de las personas, enunciados en particular en la *Convención de 1951 sobre el estatus de los refugiados* y en el *Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular* de 2018;

RECORDANDO que todos los seres humanos son titulares de todos los derechos y libertades, desde una perspectiva de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, independientemente de su estatus migratorio;

CONSIDERANDO que el contexto actual, marcado por el cambio climático, los conflictos armados y las derivas autoritarias, especialmente en los Estados Unidos, impone sobre poblaciones enteras una precariedad agravada, multiplica los desplazamientos forzados de poblaciones y obliga a un número cada vez mayor de personas a emprender migraciones;

CONSIDERANDO que la sociedad civil canadiense se moviliza enérgicamente contra los proyectos de ley C-2 y C-12 desde junio de 2025 y contra el retroceso de los derechos de las personas migrantes en general.

La FIDH expresa su profunda preocupación por los proyectos de ley C-2 y C-12 y pide al Gobierno de Canadá que los retire sin demora y que, en su lugar, actúe de manera que se respeten, protejan y organicen los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y de todas las personas migrantes.